

Una nueva esperanza para la democracia en Nicaragua





Foto: Carlos Herrera

Durante diez años, diversos actores y organizaciones sociales demandaron insistentemente el restablecimiento de la democracia en Nicaragua. Sus planteamientos parecían caer en el vacío de la sordera gubernamental hasta que la insurrección cívica de abril abrió una puerta de esperanza y el país entero comenzó a soñar nuevamente con un futuro de democracia, justicia y paz. Contrario a lo que muchos piensan, el estallido social no fue inesperado; fue el resultado de un acumulado de insatisfacciones y descontento que el gobierno pretendió contener, eliminar, y no ver, sistemáticamente.

Una década de expectativas frustradas

Cuando Daniel Ortega asumió la presidencia en 2007, muchas personas en Nicaragua estaban dispuestas a otorgarle un margen de duda en relación a la gestión de gobierno que realizaría en adelante. La frase que resumía esa duda razonable era: "Esperemos que no repita los mismos errores del pasado". En términos prácticos, las expectativas se relacionaban con la esperanza de que el gobierno implementara políticas económicas y sociales que respondieran a los problemas más sentidos por la población durante los 15 años precedentes: desempleo, difícil situación económica, pobreza y bajos ingresos.

Frente a esas expectativas, Ortega prefirió gobernar sobre la base de alianzas con las élites económicas, especialmente el gran capital nacional y transnacional, así como los sindicatos y organizaciones de trabajadores pro-go-

bierno. La subordinación de los demás poderes estatales a los designios de la presidencia, incluidos el ejército, la policía y los gobiernos locales y regionales. En vez de políticas sociales amplias, decidió promover el clientelismo y el populismo entre los sectores más necesitados y vulnerables; mientras que para los descontentos decidió instalar un sistema de vigilancia y control.

Al poco tiempo, una mayoría de población se dio cuenta que Ortega no cumpliría con las expectativas, ni con las promesas, planteadas al inicio de su mandato y el descontento comenzó a acumularse entre distintos sectores de población tanto por causa de los factores económicos y sociales, como por razones políticas. En efecto, en la medida que crecían las expectativas frustradas y que la gente intentaba expresar su descontento, el gobierno amplió y perfeccionó el sistema de vigilancia y control para contener el malestar y la insatisfacción social.

Conflictos y la acción social sostenida

La movilización social en rechazo a las políticas y el autoritarismo de Ortega comenzó tempranamente en el 2008, cuando el gobierno impuso sus resultados sobre el proceso electoral para gobiernos municipales. Las irregularidades y falta de transparencia de las elecciones provocaron una inmediata reacción de los votantes que se lanzaron a las calles en la capital y distintas ciudades del país reclamando respeto a sus votos y resultados transparentes. Las protestas fueron reprimidas violentamente por la policía y grupos pro-gobierno. Otras expresiones de descontento social y político transcurrieron en los años

subsiguientes, pero fueron sofocados por el gobierno. En la mayoría de los casos, estas expresiones estaban relacionadas con los procesos electorales y las evidentes irregularidades del sistema electoral.

Un nuevo ciclo de conflictos y movilización social se abrió en el 2013 cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley 840 que otorga a una oscura compañía china la concesión para la construcción de un canal interoceánico y otros sub proyectos. Con la aprobación de la Ley 840 se activó el movimiento campesino, así como otras expresiones ciudadanas de rechazo. Casi al mismo tiempo, se produjo el episodio conocido como Ocupalns, en el que una protesta de ancianos jubilados reclamando por sus pensiones a la seguridad social y apoyada por jóvenes, fue violentamente reprimida por “fuerzas de choque” del gobierno con la complicidad de la policía.

A partir de ese momento y hasta inicios del 2018, el movimiento campesino que rechaza la concesión canalera realizó más de 100 marchas en diferentes localidades de la zona sur del país. La mayoría de ellas fueron violentamente reprimidas como la marcha que se realizaría en Managua, la capital, en octubre de 2015. Miles de campesinos de distintas partes del país fueron impedidos de movilizarse hacia la ciudad capital por la policía; los que pudieron llegar marcharon por una de las principales vías y al llegar a cierto punto también fueron impedidos de seguir hasta la Asamblea Nacional. Al terminar la marcha, grupos de choque motorizados atacaron a los campesinos que circulaban por las calles cercanas a la carretera principal en la ciudad. Muchas marchas similares en diferentes oportunidades y localidades fueron atacadas de la misma manera; mientras los líderes del movimiento han sido perseguidos, amenazados, apresados y atacados sistemáticamente por fuerzas de la policía, el ejército y civiles partidarios del gobierno.

Otros conflictos sociales de los últimos años han girado en torno al rechazo de la industria minera. Al menos tres localidades han sostenido una lucha sistemática por impedir que sus poblaciones sean afectadas por la explotación de yacimientos: Santo Domingo, en la región central del país; El Limón, en el occidente; y Rancho Grande, en el norte-centro del país. En estos y otros poblados, las acciones de movilización y protesta se han mantenido durante años porque las concesiones para la explotación de los yacimientos han sido concedidas sin tomar en cuenta a las comunidades; no aportan tributos a la localidad y en todos los casos, afectan y destruyen recursos naturales no renovables o fuentes de agua indispensables. En todos los casos, las movilizaciones y protestas han sido reprimidas violentamente por la policía y sus líderes, detenidos de mane-

ra arbitraria. Solamente en el caso de Rancho Grande el gobierno decidió suspender la concesión a la empresa minera, pero a cambio ha perseguido a los líderes de la protesta social.

El saneamiento y titulación de las tierras propiedad de las comunidades indígenas en la Costa Caribe Norte, también ha sido un foco de conflictos desde hace años. Las tierras están localizadas dentro de la reserva natural conocida como Bosawás, un bosque de trópico húmedo con gran valor porque forma parte del corredor biológico Mesoamericano, una zona reconocida y protegida internacionalmente. Las comunidades indígenas han sido habitantes de esas localidades desde épocas ancestrales y la ley protege sus tierras que son de propiedad comunitaria. Sin embargo, desde hace varias décadas sufren la invasión de campesinos, llamados colonos, que emigran de otras zonas del país para asentarse en esas zonas y emprender actividades económicas que destruyen el bosque protegido y provocan el desplazamiento de las comunidades indígenas.

Muchos de los colonos son campesinos en condiciones precarias, pero otra parte son enviados por latifundistas que luego, mediante recursos amañados, titulan las tierras a su nombre. La invasión de las tierras comunitarias incluye métodos violentos, desplazamientos forzados, depredación de la fauna y despalle para la siembra de granos básicos o para la ganadería. La ley protege a las comunidades indígenas pero el Estado no ha tenido voluntad política para aplicarla y realizar el último paso del proceso de titulación que consiste en el saneamiento de las tierras. En ese período, también se produjeron movilizaciones y protestas en otras localidades del país por el acceso al agua; la entrega de indemnizaciones a los cañeros afectados por insuficiencia renal crónica vinculada al uso de pesticidas prohibidos; la protección de los recursos naturales y la protección de bosques y reservas biológicas como Bosawás e Indio-Maíz.

Antes de abril del 2018, en el país existían al menos 20 focos de conflicto en diferentes zonas del país, todos ellos localizados en áreas rurales. Sin embargo, las movilizaciones y protestas que transcurren desde abril cambiaron la dinámica y localización de las acciones sociales. En primer lugar, trasladaron el escenario de las acciones sociales desde las zonas rurales a todos los centros urbanos del país; lograron condensar, dar cauce y visibilizar el masivo descontento con el gobierno Ortega; dieron vida a un movimiento nacional cívico amplio, diverso y extendido; aceleraron la conformación de articulaciones, coordinaciones y alianzas; y consiguieron constituir en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia un actor reconocido nacional e internacionalmente como interlocutor para el restablecimiento de

la democracia en el Diálogo Nacional.

Una estrategia letal, pero no efectiva

Desde que Ortega asumió la presidencia del país y a sabiendas que su legitimidad era muy baja, decidió utilizar una estrategia de vigilancia y control de tal manera que le permitiera contener y eliminar cualquier expresión de descontento. Para eso, la subordinación de la policía a la presidencia, así como otros órganos del sistema de justicia penal, han sido fundamentales. Pero además, desde el año 2008, el gobierno comenzó a apoyarse en grupos de choque integrados por simpatizantes para intimidar y reprimir las marchas y protestas ciudadanas. Estos grupos fueron cambiando con el tiempo, como en el caso de los llamados “camisas azules” que formaban parte del amplio grupo de guardaespaldas de Ortega, así como los motorizados que atacaban manifestaciones ciudadanas hasta antes de abril. Estos grupos se ampliaron con la incorporación de jóvenes a los cuales se vinculaba con pandillas en ciertos barrios de los principales centros urbanos, y con los Consejo de Poder Ciudadano (CPC) o los Gabinetes de Familia.

Tal como lo ha consignado la CIDH en sus últimos informes, entre abril y julio, el gobierno emprendió una intensa represión que ha pasado por varias fases: un primer momento en el que se intentó contener las protestas con fuerzas antimotines y grupos de choque; un segundo momento en el que han utilizado fuerza letal con armas de fuego de alto calibre, francotiradores y la participación de los grupos paramilitares fuertemente armados, encapuchados y actuando con impunidad en conjunto o con la complacencia de la policía. La tercera fase ha consistido en una feroz represalia a los líderes del movimiento ciudadano en todo el país, la cual incluye: secuestros, desapariciones forzadas, una gran cantidad de prisioneros políticos y juicios espurios; todas ellas, acciones fuera de los procedimientos establecidos por la ley y violatorias de los derechos humanos.

Esta estrategia de represión, vigilancia y control, así como la que se ha ejecutado desde abril por parte del gobierno, ha quebrado a todo el sistema de justicia de Nicaragua. Pues involucra la actuación coludida y fuera de la ley de la policía, ministerio público, tribunales, sistema penitenciario y otros agentes de la administración de justicia. Otras acciones de represalia como las invasiones de propiedades privadas promovidas y legitimadas por el gobierno han provocado una alta inseguridad jurídica, agudizando la crisis del poder judicial en su conjunto y trasladándola del ámbito del

sistema político a toda la sociedad.

Con todo y su estrategia de represión, el gobierno Ortega no ha logrado contener la movilización y protesta social. Las marchas cívicas en la calle, la organización y la disputa por el discurso y los símbolos no ha cesado. Por el contrario, los Ortega – Murillo han perdido la hegemonía de las ideas, de las acciones sociales y del sistema político.

Reveses internacionales y Diálogo

Ortega había logrado promover con bastante éxito una imagen de país con estabilidad política, seguridad y con buen rumbo económico. En muchos países del mundo, especialmente Europa y Estados Unidos, el gobierno vendía a Nicaragua como un lugar con muchos atractivos para el turismo y la inversión, dos áreas de la economía que crecían a buen ritmo; muchos empresarios y ciudadanos de los países vecinos veían con buenos ojos al país como destino para hacer negocios y turismo por el supuesto clima de seguridad. El mismo sector privado reconocía una tendencia de crecimiento económico. Sin embargo, esa imagen escondía las enormes brechas sociales, los conflictos, el descontento y las violaciones a los derechos humanos y ciudadanos que se habían venido acumulando durante los diez años de gobierno Ortega.

La imagen se cayó estrepitosamente en abril y a partir de ese momento, los reveses del gobierno con la comunidad internacional se han multiplicado rápidamente. La razón principal es la flagrante violación de los derechos humanos de la población por la represión. Eso lo ha colocado en una situación de aislamiento y fuerte presión de parte de actores internacionales clave como la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha emitido una declaración, dos resoluciones y ha conformado un grupo de trabajo para atender la situación de Nicaragua.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que realizó una visita de observación, elaboró un informe sobre las violaciones a los derechos humanos y ha desplegado dos equipos de trabajo en el país; el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDHNU) que se ha pronunciado en varias ocasiones y envió una misión al país; la Unión Europea y numerosos países que se han pronunciado de manera bilateral. A ellos se suman los pronunciamientos de académicos, partidos y coaliciones políticas, ONGs y muchos otros actores internacionales, incluida la diáspora nicaragüense.

El gobierno de Estados Unidos es uno de los que ha incrementado sus presiones a Ortega, con declaraciones de funcionarios al más alto



Foto: Carlos Herrera

nivel y congresistas, cabildeo en foros internacionales, aprobación de sanciones como la incorporación de funcionarios orteguistas a la lista Magnitsky, entre otras.

Todas las declaraciones y pronunciamientos han insistido sobre la necesidad de cesar la represión, hacer justicia a las víctimas, restablecer el diálogo y retomar la senda democrática en el país.

Internamente, el Diálogo, que ha sido visualizado como la ruta más efectiva, pacífica y democrática para encontrar una solución negociada a la crisis, se encuentra en un impase por la negativa del gobierno de acudir a las mesas de trabajo y al plenario, pero también por la actitud de confrontación que ha adoptado respecto a la Conferencia Episcopal, así como la persecución y represión a varios integrantes de la Alianza Cívica como los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, y líderes estudiantiles. De acuerdo con algunos análisis, la intención de Ortega al prolongar el impase del Diálogo es encontrar nuevos mediadores e interlocutores a su medida, a fin de negociar en sus términos. Hasta ahora, sus intentos han fallado y aunque las sesiones formales no se han reanudado, tanto a nivel interno como en el exterior, todas las voces demandan a Ortega retomar el Diálogo.

Oportunidades para la esperanza

En medio de la vorágine que para los nicaragüenses ha significado esta jornada cívica de acción y resistencia ciudadana, es importante poner en perspectiva los resultados más importantes. El primero de ellos es que Daniel Ortega y su gobierno se enfrenta ineludiblemente

a una correlación de fuerzas enorme y estratégicamente desfavorable, tanto en el interior como en el exterior del país. Las bases de su fuerza, que antes descansaban en el populismo, el clientelismo y el temor, están prácticamente derruidas y ninguna de ellas logra proveerle ya mínimos de confianza, legitimidad ni respaldo ciudadano.

El tiempo juega como un factor desfavorable para Ortega por varias razones: las fuerzas policiales y paramilitares que lo sostienen se encuentran desmoralizadas, agotadas y disminuidas; el ritmo y la dinámica de las movilizaciones sociales no ha disminuido y más bien muestra tendencia a un repunte una vez que comiencen a hacerse sentir los efectos de la crisis sobre la economía y el descontento social vuelva a expresarse con fuerza. Los plazos son cortos, de manera que los próximos meses serán críticos y decisivos.

Una vez que se conozcan con mayor detalle las consecuencias de la represión y violencia estatal, especialmente a través de los informes que elaboren los organismos internacionales de derechos humanos, se incrementará la presión internacional. Especial importancia tienen foros como el Consejo Permanente de la OEA que ya ha expresado su preocupación e interés de monitorear de cerca la situación del país. Es previsible que se incremente el aislamiento internacional de Ortega y que Estados Unidos, en particular, utilice nuevos recursos de presión.

La convergencia de todos estos factores conforma un escenario favorable para el restablecimiento de la democracia. Llegar hasta allí constituye un reto complejo y para nada fácil, pero cada vez más factible. Las oportunidades están a la mano y en Nicaragua, la esperanza cada vez tiene más espacio.